

Cuadernos del Sur

Número 10 ■ Noviembre de 1989

Tierra fuego
del

LA ECONOMIA POLITICA DE ALFONSIN ¿AJUSTE O MODERNIZACION?

Guillermo E. Gigliani.

El curso fundamental de la política económica de Raúl Alfonsín estuvo signado por el pago de la deuda externa. A lo largo de cinco años y medio (diciembre de 1983-julio 1989), el gobierno radical trasitó por el camino del ajuste exigido por el FMI y la banca acreedora. Tal gestión provocó una extraordinaria transferencia del excedente y tuvo un impacto desvastador sobre el proceso productivo.

En medio de la crisis y de la violenta inflación, el bloque dominante, industrial, bancario y agropecuario, que se había consolidado durante el período Martínez de Hoz, fortaleció su poder económico y político.

Durante estos años, además de haberse acentuado la dependencia externa, continuó desarrolándose el proceso de centralización y concentración del capital. Este crecimiento de la gran burguesía descansó, al igual que durante el período militar, en la “acumulación primitiva” de fondos estatales, lo cual contribuyó a agravar la situación del presupuesto fiscal y a exacerbar la inflación.

En los primeros meses del gobierno radical, a principios de 1984, el bloque hegemónico presionó para que se llegara a un acuerdo con el comité de bancos acreedores, comandado por William Rhodes, del Citicorp. Tal presión apuntaba a que el alfonsinismo se allanara a aplicar el ajuste del FMI. Los depósitos radicados en el exterior determinaban que esa política, venirse a las exigencias de la banca, fuera lo más conveniente a sus intereses.

La gestión de Bernardo Grinspun en el Ministerio de Economía, no cumplió ese objetivo y recién el plan Austral, lanzado en junio de 1985, por el nuevo ministro Juan Sourouille marcó el inicio de un entendimiento más estable con la burguesía local y con el sistema imperialista.

Pero, el propósito de Alfonsín era llegar a un acuerdo con el bloque dominante que fuera más allá del ajuste y que pudiera encarar un proceso de reorganización profunda del capitalismo argentino. Este cometido, que se dio en llamar el “proyecto de modernización”, suponía ahondar las transformaciones económicas y sociales operadas desde 1976, aumentar la capacidad generadora de plusvalía del sistema económico y orientar su funcionamiento hacia el mercado mundial.

Los resultados obtenidos por el gobierno radical deben ser juzgados desde esa doble perspectiva. Alfonsín fue un ejecutor contumaz del ajuste, pero no pudo contener el desenvolvimiento ciego de la crisis. La mayor parte de su ciclo estuvo signado por la caída del salario real, el retroceso de la producción y de la inversión, la especulación financiera permanente y culminó en la hiperinflación.

La explosión inflacionaria de la primera mitad de 1989 determinó una abrupta interrupción del proceso de producción y realización de la plusvalía, la virtual desaparición de la moneda y la pulverización del poder de compra de los salarios. Estas condiciones sellaron la suerte de las elecciones del 14 de mayo. El candidato peronista Carlos Menem resultó electo presidente por una abrumadora mayoría.

La crisis económica y financiera con que concluyó la gestión alfonsinista sumergió a millones de argentinos en el hambre y en la desesperación. A fines de mayo, decenas de miles de hombres y mujeres se lanzaron a asaltar supermercados en Rosario y en el Gran Buenos Aires, para poder comer. La respuesta del gobierno radical —con el apoyo del peronismo—, fue la declaración del estado de sitio y una represión brutal que arrojó 14 muertos. El 12 de junio, Alfonsín, acosado por la fuerza de la conmoción social, decidió abandonar la presidencia.

En el contexto de esta sucesión ininterrumpida de crisis, el modelo de acumulación impuesto en 1976, continuó consolidándose. Es cierto que el radicalismo no pudo plasmar el “proyecto de modernización”, en forma acabada, y que tampoco consiguió inaugurar un ciclo de expansión productiva. Pero, la reconversión capitalista continuó avanzando a toda máquina. En 1988, en plena recesión, las exportaciones industriales crecieron un 45% y el PBI industrial cayó un 7%. En los primeros seis meses de 1989, las exportaciones manufactureras volvieron a crecer otro 40% y el PBI industrial se desplomó otro 12%.

De esta forma, el alfonsinismo ocupó una etapa particular del capitalismo contemporáneo. Sus logros están ligados a la afirmación, en un sentido

reaccionario, de los resultados económicos del período anterior, del ciclo Martínez de Hoz. La reconversión, ejecutada por los militares de manera brutal, encontró una legitimación en el gobierno radical, que la continuó por medios parlamentarios. El ritmo de este proceso no deja lugar a dudas: durante estos años, la cúpula de la burguesía se consolidó más que en el período anterior.

Comparte, además, con el “proceso”, un fracaso decisivo: no haber podido plasmar un curso expansivo.

Durante estos años, la marcha del capitalismo argentino estuvo estrechamente condicionada por la economía mundial. La explosión de la deuda externa en 1982 agravó la crisis de las finanzas internacionales y una de las vías para amortiguarla fue transferir los costos a la periferia. El ajuste representó la adaptación de los países deudores a las exigencias de reestructuración del imperialismo, y ello se tradujo en recesión e inflación.

La tarea inconclusa de consolidar una fase productiva pasó al gobierno de Carlos S. Menem. El jefe actual del peronismo había empezado su campaña electoral con las consignas de “moratoria” y de “salarizazo”. Pero, a medida que se acercaba la fecha de las elecciones, el mensaje de Menem se diferenció de la dupla Angeloz-Alsogaray y tendía a remitirse, aunque esporádicamente, al discurso del peronismo histórico.

Pero, después del 14 de mayo, Menem jugó una carta inesperada. Anunció un acuerdo con Bunge y Born y colocó a su máximo ejecutivo en el Ministerio de Economía. La nueva política cosechó el respaldo del bloque dominante, del FMI y del cartel bancario acreedor.

En pocos días, el jefe del cuarto peronismo, de lo que Horowicz llamó el “peronismo de la derrota”¹, consumó una campaña arrolladora de privatizaciones, desregulación y apertura externa. Con ello el programa económico de Menem se erigió en la continuación, y en la profundización, en todos los planos, del proceso de reorganización capitalista abierto en 1976, reforzado por la legitimidad política de ocho millones de votos.

En los tiempos que se vienen se verá el grado de éxito o de fracaso de esta nueva versión del proyecto del bloque hegemónico y, al mismo tiempo, en qué medida la clase obrera podrá recomponer sus fuerzas y su dirección política para resistir una ofensiva que vulnera sus intereses más inmediatos, en primer lugar, el de contar con niveles mínimos de subsistencia.

Pero, en lo que sigue, se analizará el curso alfonsinista. En particular, se tratará de indagar cuáles fueron los factores que permitieron que el radicalismo avanzara, sin pausas y sin una oposición relevante, en el camino del

ajuste y de la reconversión. Ello equivale a preguntarse cómo resultó posible sostener una política económica continuadora de la estrategia del gobierno militar, en el contexto de un gobierno civil, con elecciones parlamentarias cada dos años: Cuáles fueron, por consiguiente, las condiciones sociales, políticas y económicas que garantizaron la marcha de la política alfonsinista y su poder para condicionar a los demás partidos del sistema, en particular, al peronismo.

La derrota del 76 y la reconversión del capitalismo.

Existe una razón decisiva que explica la “estabilidad” de la gestión alfonsinista, su insistencia en el ajuste a lo largo de cinco años, sin que ese rumbo haya sido afectado por rectificaciones fundamentales:

Entre la política aplicada por el gobierno radical y los anteriores planes de ajuste, medió el proceso militar de 1976-83. Esto es, la derrota política de la clase obrera, conseguida a sangre y fuego, y además, el conjunto de transformaciones que se operaron en la economía argentina. Resultaría imposible concebir la perdurabilidad, durante todo ese tiempo, de la política de Juan Sourrouille, de no haber mediado los cambios introducidos por Martínez de Hoz.

Entre esos cambios, existen dos, cuya consideración resulta fundamental. Primero, a partir de 1976, quedó saldada la cuestión de cuál es la fracción hegemónica de la burguesía argentina. La política de Martínez de Hoz tuvo la virtud de unificar a las clases dominantes sobre la base del modelo de acumulación sustitutivo, vigente hasta entonces, y puso en marcha un ciclo de concentración del capital nacional, que arrojó a la ruina a segmentos considerables de la burguesía chica y mediana. Esto es, los barrios del mapa industrial.

Segundo, la “estabilidad” de la política económica del radicalismo se asentó sobre la derrota de la clase obrera, llevada a cabo durante la dictadura militar mediante una represión brutal. La continuidad de las condiciones de retroceso obrero y la falta de una dirección político-sindical, permitieron que el alfonsinismo consolidara la situación abierta en 1976, por medios económicos y sociales.

El golpe del 76 se propuso reorganizar estructuralmente el funcionamiento del capitalismo argentino. El programa impulsado por Martínez de Hoz buscó reconvertir la industria para orientarla al mercado mundial, re-

ducir la importancia del mercado interno y aumentar rápidamente la rentabilidad del capital.

El resultado fue incrementar, en forma drástica, la masa de plusvalía generada por el sistema. Entre 1975 y 1976, la participación de los salarios en el PBI cayó del 43,1% al 27,6%.

El proyecto económico del gobierno militar se llevó a cabo en una fase del ciclo imperialista caracterizada por un auge extraordinario de la exportación de capitales monetarios, de eurodólares, a la periferia.² Martínez de Hoz aprovechó estas condiciones y dió impulso a una estrategia de transnacionalización financiera que provocó un ingreso arrollador de préstamos de corto plazo. Entre 1975 y 1981, el endeudamiento externo argentino saltó de 8.085 a 35.671 millones de dólares.

Esa masa extraordinaria de divisas sirvió a dos fines principales. Primero, fue un instrumento que consolidó el proceso de concentración del capital. En particular, el crecimiento formidable de grupos pertenecientes a la gran burguesía local. De acuerdo a Eduardo Basualdo³, a fines de 1983, 30 grupos internos participaban en el 34,5% de la deuda externa privada. A su vez, 106 empresas extranjeras concentraban otro 34,0%. Esto significa que un centenar de consorcios imperialistas y 30 monopolios de capital local, responden por la parte del león, por el 68,5% del endeudamiento privado.

Segundo, la deuda sirvió para financiar la fuga de capitales más extraordinaria de la historia argentina. En los últimos quince años, las clases dominantes territorializaron en los países metropolitanos una suma estimada por la banca Morgan en 46.000 millones de dólares. La mayor parte de esa fuga de divisas se llevó a cabo en aquella época, esto es, entre 1978 y 1982.

Uno y otro aspecto verifican que la deuda externa es, en un sentido fundamental, un problema interno del capitalismo argentino. Sirvió para financiar el proceso de reconversión iniciado en 1976 y, además, convirtió a los capitalistas argentinos en una “clase acreedora”, para la cual, como dice James Petras, el pago de la deuda tiene un carácter positivo.⁴

El proceso de reconversión industrial impulsado por Martínez de Hoz, que provocó el cierre de empresas y la expulsión de 150.000 asalariados del centro de la producción manufacturera, se desarrolló en un contexto de crisis y de recesiones periódicas y, finalmente, explotó con el colapso de balanza de pagos de marzo de 1981. En otros términos, el proyecto fundamental inaugurado en 1976 removió las bases del viejo modelo de acumulación, echó las bases de otro nuevo, pero tuvo un pobre resultado en términos de

iniciar un ciclo de expansión capitalista, de acumulación del capital reproductivo.

A pesar de esta limitación, el “proceso” tuvo un logro indiscutido. El bloque burgués se unificó sobre la base de su sector más concentrado, constituido por industriales, banqueros y terratenientes.

A lo largo de este período, se consolidaron los rasgos dominantes de la cúpula burguesa. En forma casi invariable, los grupos monopólicos nacionales se expandieron diversificando sus actividades en la industria, el agro, la banca y los servicios. En una alta proporción, esos conglomerados encararon su transnacionalización, estableciendo vínculos con el exterior de carácter comercial, financiero y productivo.

Por otra parte, durante estos años, el crecimiento de la burguesía se apoyó en un proceso de “acumulación primitiva”, sostenido por el subsidio estatal.

Ello ocurrió desde un principio, mediante los regímenes de obra pública, de promoción industrial, y el mecanismo de la “tablita cambiaria” (1979-81) para ingresar capitales externos. Pero, adquirió proporciones gigantescas, a partir del crac de balanza de pagos de 1981. Esta fecha marca el inicio de la aplicación de una serie de políticas impuestas por el bloque dominante (seguros de cambio, estatización de la deuda externa, licuación de la deuda interna), tendientes a descargar los costos de la crisis sobre toda la sociedad. En este último período, la magnitud del subsidio estatal directo a la inversión capitalista alcanzó valores inéditos. El efecto de este conjunto de operaciones fue arrojar al Estado a una situación de virtual quiebra financiera.

De la dictadura a la democracia

El crac de balanza de pagos de 1981 señaló el fin de la gestión Martínez de Hoz y abrió una etapa de crisis continuadas. Cuando, en agosto de 1982, el gobierno de México se declaró en cesación de pagos, la crisis de la deuda mundial se sobreimpresionó a la crisis argentina.

El colapso de la deuda de América Latina inauguró un período de brutal exacción imperialista sobre los países deudores. La banca acreedora se agrupó en un “cartel” unificado, recibió el apoyo del gobierno de EE.UU. y, además, contó con la gestión del FMI, cuya misión principal fue coordinar con los deudores la aplicación de programas de ajuste que permitieran acumular divisas; a costa de provocar la recesión interna.

El último turno del gobierno militar presidido por el general Bignone, se allanó a las exigencias del FMI, sin ningún tipo de resistencia y empezó a pagar la deuda. El bloque dominante endosó esa política. Para los “capitalistas transnacionales” de la Argentina, el mantenimiento de relaciones “armónicas” con el imperialismo era un asunto que encajaba con sus intereses, por su condición de “clase acreedora”.

Existe una razón adicional que explica la falta de una actitud defensiva mínima de la burguesía frente a la banca. Tal como lo comprobó una investigación encarada por el propio Banco Central que 11 nunca tomó estado público⁹, la deuda externa privada era, en gran parte, un fraude. La investigación documentó perfectamente que lo que aparecía como deuda externa de Ford, Fiat, Pérez Companc, Renault y otros monopolios, eran en realidad, operaciones ficticias para comprar dólares baratos. Se trataba, por ejemplo, de simular deudas mediante la constitución de depósitos en el banco prestamista, para poder obtener dólares a precios subsidiados por el Estado.

Obviamente, discutir con los bancos y el FMI en otros términos, “politicizar” la deuda, arrastraba el riesgo de echar luz sobre esas estafas que abarcaban una alta proporción de los préstamos privados. En estas circunstancias, lo mejor era pagar sin hacer mucho ruido.

Sourrouille: un ministro para el bloque dominante.

La derrota de las Malvinas determinó la caída del general Galtieri y la convocatoria a elecciones para el 30 de octubre de 1983. Para la banca y el FMI, negociar con un gobierno débil y en retirada no ofrecía demasiadas perspectivas. En consecuencia, el futuro de los pagos dependía del signo del gobierno civil que resultara electo.

El resultado de los comicios colocó en el gobierno a Raúl Alfonsín, un candidato que había explicitado su intención de no tocar un ápice los intereses del imperialismo y de las clases dominantes.

Como responsable del área, Alfonsín designó a Bernardo Grinspun, un economista para el cual el proceso de reconversión había pasado inadvertido. Pagar la deuda, pelearse con los enviados del fondo y mantener determinados niveles de actividad en el mercado interno, no ofrecía, en su particular óptica, dificultades insalvables.

Cuando el agravamiento de la crisis y la presión del FMI hizo insostenible su posición, el presidente Alfonsín lo reemplazó por el hombre indicado. El hasta entonces Secretario de Planificación, Juan V. Sourrouille, asu-

mió sus funciones en febrero de 1985. Para el nuevo ministro y su equipo, no existía ninguna chance de manejar la coyuntura si no se establecía un acuerdo con el FMI.

Entre febrero y junio de 1985, varias cosas quedaron resueltas. Primero, el gobierno argentino inició tratativas inmediatas en Washington para convenir un programa de ajuste. Segundo, la conducción económica pasó a un hombre convencido de que el mercado interno no contaba para dinamizar el capitalismo argentino. Tercero, para el nuevo ministro, el salario real debía caer y ello empezó a ser ejecutado desde el primer día de su gestión.

En marzo de 1985, Alfonsín anunció desde Houston, EE.UU., una nueva política petrolera. Este fue el punto de partida para entablar una relación más estable con el bloque dominante. En este nuevo curso, se planteó el debate del "proyecto de modernización". En otros términos, la discusión de cuál habría de ser el modelo futuro de la Argentina.

En sus diagnósticos de la crisis, los políticos y los economistas del sistema, los capitalistas y los acreedores, coincidían en un punto fundamental. El crac de marzo de 1981 y la brutal exacción provocada por la deuda externa, habían agravado, hasta límites inéditos, la crisis del capitalismo argentino, pero no la habían provocado. Uno y otro factor tuvieron por efecto, exacerbar, profundizar, una crisis ya existente.

Tal crisis, su naturaleza y su intensidad, se vinculaba a los condicionantes estructurales de la economía nacional, subdesarrollada y dependiente, los cuales constituyeron un factor fundamental del endeudamiento, más allá de lo ocurrido a fines de los años 70. El problema de la deuda no hizo sino exacerbar aquellos desequilibrios básicos, imprimiéndoles una dimensión extraordinaria.

Entonces, si la crisis estaba vinculada a los fundamentos mismos del régimen productivo, salir de ella requería, más allá de dominar la coyuntura, una reorganización profunda del sistema, que fuera capaz de dinamizar el crecimiento de las fuerzas productivas, y en particular, de incrementar la capacidad de generar plusvalía relativa a través de nuevas inversiones. Tales la última ratio del "proyecto de modernización", que el gobierno se apresataba a discutir con el bloque dominante.

Estado, crisis e inflación.

A mediados de 1985, la inflación cruzaba la barrera del 1000% anual. La recesión sacudía todos los mercados y el salario real sufría un fuerte deterioro.

Frente a esta situación, la preocupación número uno del gobierno de Al-

fonsín y del bloque dominante pasó a ser controlar el desenvolvimiento ciego de la crisis por dos razones básicas: 1) su desbocamiento podía generar un alto costo social y político; 2) para la burguesía, el desarrollo de la crisis no aseguraba, por sí solo, el cumplimiento de las metas de reorganización del capitalismo, entre otras razones, por el riesgo inminente de la hiperinflación.

En estas circunstancias, Alfonsín jugó todas sus cartas a ganar la confianza de los banqueros internacionales. En el mes de mayo, José L. Machinera y Mario Brodersohn se trasladaron a Washington a discutir un nuevo plan de ajuste con Jacques de Larosiere, del FMI y Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal.

La existencia de estas tratativas fue completamente desconocida en la Argentina, hasta la fecha del anuncio del plan. En la noche del 14 de junio de 1985, Alfonsín y su ministro, dieron a conocer el Plan Austral. El programa, cuyo objetivo inmediato era frenar la carrera violenta de los precios, contenía las metas fiscales, monetarias y cambiarias, propias de cualquier plan de ajuste. A estas medidas, se le agregaba un congelamiento del salario, el tipo de cambio y los precios industriales. Por su lado, el compromiso de pagar los intereses de la deuda se mantenía incombustible.

En otras palabras, el plan se proponía posibilitar que la transferencia de recursos se realizara en un marco de equilibrio. El drenaje de divisas debía continuar, pero cuidando que ello no originara un incendio inflacionario.

El plan Austral y la fantasía alfonsinista

El Austral fue, en su comienzo, en su época de esplendor, una victoria alfonsinista en toda la línea. Las medidas recibieron el respaldo de todas las fracciones de la burguesía. La Unión Industrial, ADEBA y la Sociedad Rural apoyaron el programa. Roberto Alemann y Adalbert Krieger Vasena, entre otros economistas cuyas voces son escuchadas atentamente por la banca extranjera, impartieron su conformidad pública.

El radicalismo lo presentó como un plan “heterodoxo”, que posibilitaría eliminar la inflación y retomar el crecimiento. Además, tales logros habrían de ser alcanzados con la colaboración del FMI y del propio gobierno de Reagan. En vez del conflicto, que era propiciado por la izquierda, Alfonsín

y Sorrouille optaban por el acuerdo. Era la negociación y no la moratoria o el enfrentamiento, lo que permitiría borrar el fantasma de la hiperinflación.

El éxito del alfonsinismo fue “poliúzar” el problema de la inflación y dissociarlo del tema de la deuda externa, del parasitismo de la burguesía y de la política del ajuste. La deuda era desplazada en el orden temporal, para ser resuelta más adelante, con la ayuda de los acreedores. La crisis quedaba reducida, así, a una cuestión técnica, que podía ser conjurada por un equipo notable de expertos en “efectos iniciales” y en “shocks”. En la cumbre de esta ofensiva ideológica, Sourrouille y sus hombres repetían, a los cuatro vientos, que el plan resultaba “neutral” desde el punto de vista de la distribución del ingreso.

El primer fascinado por los resultados inmediatos fue el propio Alfonsín. Con este plan, sus ideas encontraban una traducción práctica, algo que los propios economistas del radicalismo, como Bernardo Grinspun, no le habían sabido proporcionar.

Con el razonamiento simplista que le inculcaban sus asesores (los del Plan Austral y los del Club Socialista), Alfonsín pensó que una vez resuelto el problema de la inflación, quedaba expedito el camino para que la burguesía argentina pusiera en funcionamiento el proceso productivo.

En el partido justicialista, las actitudes oscilaron entre el apoyo entusiasta y el visto bueno. Esta reacción no era casual. El cuarto peronismo, que arrancó en la época del Rodrigazo y de Isabel Perón, se expresaba, en esta época, en el proceso de alfonsinización de la sociedad. Desde el punto de vista de la estabilidad del sistema, el mérito de Alfonsín no puede ser medido únicamente por su victoria aplastante sobre el peronismo en 1983, sino además, por su capacidad para reconvertirlo, para “democratizarlo”, despojándolo de todo contenido obrero o sindical.

Frente al Austral, ni un socialcristiano como Cafiero (o socialdemócrata, según se prefiera), ni un histórico como Menem, tenía objeciones relevantes, ni un proyecto alternativo. Por eso, lo apoyaron.

Este dato crucial, la falta de una propuesta económica diferente a la del radicalismo (a la del bloque dominante), que empalmara, por lo menos tímidamente, con el nacionalismo económico (burgués), permite entender la trayectoria posterior del peronismo, la facilidad con que el alfonsinismo podía influirlo y, también, la extraordinaria rapidez con que Menem fue cooptado por el bloque dominante, días después de las elecciones del 14 de mayo de 1989.

El plan Austral y la ofensiva del capital

Para la burguesía, el plan encerraba dos elementos decisivos. Primero, buscaba conseguir un reordenamiento fiscal y monetario que permitiera que el drenaje de divisas se operara en un marco de “normalidad”. Segundo, tenía a recuperar las condiciones de rentabilidad y a crear las bases para reestructurar el proceso de producción.

Como ocurre con todos los programas de ajuste, el Austral operó sobre el empleo y el salario. La evolución del salario real y de la productividad industrial permite evaluar en qué medida la gestión de Sourrouille transfirió el costo del ajuste a los asalariados. Entre el último trimestre de 1984 y el último de 1985, el costo salarial de la industria se redujo un 26.7%, como consecuencia del incremento de la productividad y de la caída del salario.

Cuadro 1

Productividad y Costo Salarial (1983= 100)

Período	Salario Horario	Productividad	Costo Salarial
	Real	horaria	
1984 (IV trimestre)	136,6	100,6	135,8
1985 (IV trimestre)	130,4	114,6	99,1
1986	124,7	111,8	111,5
1987	121,9	114,0	106,9
1988	100,6	104,3	96,5
1989*	91,8	104,9	87,5

* Estimado primer semestre.

FUENTE: B.C.R.A. - INDEC.

En términos de las cuentas nacionales disponibles, el costo salarial permite obtener una aproximación a la tasa de plusvalía⁶. Esto da una idea del incremento notable de la explotación de la fuerza de trabajo a lo largo del primer año del Austral.

El programa del 14 de junio de 1985 experimentó, a partir de agosto de 1986, sucesivos retoques y modificaciones, pero esas actualizaciones mantuvieron la política del ajuste hasta comienzos de 1989.

Esto tuvo un impacto contundente sobre los niveles de empleo, conformando una situación de desocupación estructural sin precedentes en la serie histórica.

La tasa de desocupación pasó del 4,1%, en 1984, al 6,1%, en 1988. A su vez, la subocupación, subió de 4,5%, en 1984, al 7,9%, en 1988. La suma de ambas tasas se ubica en niveles récord, aún si se toma en cuenta el período militar, alcanzando al 14,0%, en 1988. En abril de 1989, llegó al 16,0%.

Además de consolidar una tasa estable de desocupación estructural, el gobierno deprimió fuertemente el salario real. La participación de los asalariados en el PBI permite medir esa caída. Con la excepción del incremento otorgado por Grinspun en 1984, que no alcanzó para acercar los salarios a los niveles de la primera mitad de la década del 70, la distribución del ingreso del alfonsinismo no se diferencia de la de Martínez de Hoz.

En este campo se puede verificar que los resultados del golpe de 1976 se prolongan a nuestros días. La política de Alfonsín profundizó la caída salarial para restaurar la rentabilidad capitalista, aumentar los saldos exportables y expandir las exportaciones industriales con mano de obra barata.

Estos cambios quedaron consolidados por la hiperinflación de 1989 y representan el punto de partida del proyecto reaccionario que Carlos Menem está dispuesto a llevar adelante.

Ajuste y “dolarización”

El plan Austral, como se señaló, fue seguido por sucesivos ajustes, cada uno de los cuales estuvo supervisado por el FMI. Entre junio de 1985 y febrero de 1988, el Ministro Sourrouille firmó ocho memorandum de entendimiento⁷. Cuando, a mediados de 1988, la crisis se hizo inmanejable para el gobierno, la supervisión del Fondo obviamente, dejó de tener un sentido práctico.

Más allá de las declaraciones que se vertían en los papeles, el ajuste estaba orientado a asegurar el pago de la deuda. En la década del 80, la misión del FMI se centró en garantizar la circulación de plusvalía desde la periferia latinoamericana hacia las naciones metropolitanas.

Por esta misma razón, el objetivo antiinflacionario, que solía ser presentado como meta principal de los programas de ajuste era, a todas luces, un

objetivo secundario, subordinado a la exigencia de incrementar, de maximizar, el excedente de la balanza comercial⁸.

Más aún, los planes de ajuste, como el caso del Austral, no solamente carecían de una estrategia global para erradicar la inflación, sino que por su propia finalidad, por sus objetivos verdaderos, tendían a acentuarla.

Por lo menos, dos patas del ajuste contribuyeron a reciclar la inflación. Primero, el pago de los intereses externos. Segundo, la política de especulación financiera.

Pagar la deuda y estabilizar los precios es un contrasentido. El destino de los préstamos externos fue alimentar una fuga de capitales, cuyo costo fue transferido a la sociedad. Por eso, el 90% de la deuda es de carácter público (por su origen o por haber sido nacionalizada) y el Estado carece de recursos genuinos para afrontar su cumplimiento.

La política encarada por Alfonsín intentaba solucionar el llamado “problema real” de la deuda: acumular el máximo saldo comercial posible. Por esta razón, el FMI la aprobó y el Tesoro de EE.UU. aportó un crédito-puente. Pero, el ajuste era incapaz de resolver el “problema presupuestario”: cómo conseguir los recursos fiscales genuinos para comprar los dólares generados por la balanza comercial.

Esta contradicción estuvo en el acta misma de nacimiento del Plan Austral y ello explica por qué la inflación retornó, con toda virulencia, a partir de 1986.

La política “heterodoxa” aplicada por Sourrouille tenía otro elemento desestabilizador. Este consistía en mantener altas tasas de interés y congelar el crecimiento del dólar. Mediante este sencillo mecanismo, las distintas fracciones de la burguesía obtuvieron superganancias especulativas en el mercado bancario. En un año, los inversores pudieron duplicar su capital inicial. El que había depositado 1.000 dólares en julio de 1985, se juntó con 2.000 en junio de 1986.

Para los “capitalistas transnacionales” de la Argentina, las altas tasas de interés internas acarrean la posibilidad de pingües beneficios porque traen sus capitales del exterior y los invierten en bancos o en títulos públicos. En consecuencia, lo que parece irracional para el capitalismo en general (tasas de interés exorbitantes), resulta racional desde el punto de vista de la clase capitalista argentina⁹.

Pero, la especulación introducida por el equipo Sourrouille terminó por

adquirir el carácter de una fuerza enormemente destructiva. Por un lado, bloqueó toda perspectiva de reactivación productiva. Por el otro, provocó un crecimiento descomunal de los depósitos bancarios, lo cual tuvo como contrapartida la realimentación de una deuda interna peculiar: el sistema de encajes bancarios remunerados por el Banco Central. El pago de estos encajes (el déficit quasi-fiscal, en la jerga del FMI), se convirtió en un factor inflacionario permanente.

Cuando, en 1987, la inflación se hizo incontrolable y la especulación empezó a desplazarse de los depósitos hacia el dólar, el gobierno emitió títulos del Tesoro ajustados por la divisa norteamericana y dio curso a lo que Pierre Salama llamó la “dolarización” del sistema económico¹⁰.

El pago de la deuda externa requirió un ajuste que elevara la tasa de interés y devaluara permanentemente la moneda. Al atar la deuda interna al dólar, se hizo depender el gasto público y el déficit fiscal del sector externo. Para Salama, la “dolarización” somete el sistema financiero a los vaivenes del tipo de cambio, lo cual exponencia el crecimiento de la inflación.

De esta forma, el vértigo especulativo abrió el paso al vértigo inflacionario. Con la “dolarización” de los títulos públicos bastaba un shock cambiario para que la deuda interna y el déficit fiscal se potenciaran. El camino a la hiperinflación quedó franqueado.

Argentina en la década del 80: la exacción imperialista

“El mundo ha quedado dividido en un puñado de Estados usureros y una enorme mayoría de Estados deudores”¹¹. Con esta frase Lenin retrató la capacidad del capital metropolitano invertido en las semicolonias, en la época de auge del imperialismo (1875-1914).

Seis décadas más tarde, aquel cuadro se repetía con igual intensidad. La exacción del capital imperialista representó, en la década del 80, el obstáculo más formidable para la marcha de la periferia latinoamericana.

La crisis de la deuda, que estalló en 1982 y continúa a nuestros días, convirtió a los países de América Latina en exportadores netos de plusvalía.

El excedente anual del intercambio comercial mide la capacidad de pagos del país y es la forma más directa de calcular la transferencia neta al exterior. Entre 1982 y 1989, la transferencia argentina así estimada, fue de 24.512 millones de dólares. Si se considera el período de Alfonsín (1984-89), corresponden 18.891 millones.

Cuadro 2

Deuda externa y transferencia de recursos
(en millones de dólares)

Año	Servicios financieros				
	Deuda externa	Servicios financieros	en % importaciones totales	en % importaciones bienes	Transferencia neta al exterior
1982	43.634	4.719	88,4	603,5	2.288
1983	45.069	5.408	119,8	845,0	3.332
1984	46.171	5.712	124,6	944,1	3.523
1985	49.326	5.304	139,0	885,5	4.583
1986	51.422	4.416	93,5	407,8	2.130
1987	58.324	4.485	77,1	460,0	542
1988	59.000	5.127	96,3	512,7	3.813
1989*	s/d	6.400	148,8	640,0	4.300

* Estimado.

FUENTE: INDEC, B.C.R.A. y estimaciones.

En su mayor parte, ese giro de dólares se destinó al pago de intereses a la banca internacional. Pero, en medio de la crisis, todas las fuentes de extracción del excedente se intensificaron. El pago de utilidades a la inversión directa y de royalties alcanzó, en estos años, un valor récord¹².

La salida de plusvalía operada en este período representa una magnitud extraordinaria, medida por cualquier patrón. Una sencilla comparación servirá para verificar esta afirmación. De acuerdo a estimaciones del FMI, el valor del stock de inversión directa extranjera existente en la Argentina era, a fines de 1983, de 5.800 millones de dólares. Por lo tanto, el "tributo colonial" pagado durante el gobierno radical (1984-89) es equivalente a dos veces y media el valor de los activos de propiedad extranjera acumulados a lo largo de décadas. Si se tiene en cuenta todo el período (1982-89), este tributo equivale a casi cuatro veces el valor del stock físico de capital imperialista radicado en el país.

Esta salida de divisas no representó, sin embargo, la única forma de apro-

piación del excedente. El pago de la deuda exige que los países deudores exporten cada vez más, aunque los precios de sus productos caigan a niveles históricos. En consecuencia, la cobranza de la deuda tiene por efecto agravar las pérdidas originadas en el intercambio desigual. En virtud de ello, las dos formas de explotación imperialista, la deuda y el comercio no equivalente, se refuerzan y adquieren una intensidad inédita.

Tomando como referencia los términos del intercambio vigentes en 1980, se puede tener una medida indirecta de la transferencia de valor a través del comercio. Entre 1982 y 1988, la Argentina perdió la suma de 18.104 millones de dólares. Esta cifra aumentaría, si se computaran las cifras correspondientes a 1989.

Pago de la deuda y recesión permanente

En una sociedad capitalista, la reproducción simple significa que la plusvalía anual se consume totalmente en forma improductiva por la clase burguesa y que falta la acumulación del capital.

En la Argentina, el impacto de la deuda externa no sólo impidió que la economía creciera, sino, incluso, que cumpliera el ciclo de la reproducción simple. El impacto de los programas de ajuste sobre la actividad productiva fue demoledor. La recesión y la desinversión se convirtieron en el método normal para girar divisas al exterior.

Las estadísticas oficiales reflejan esta situación. Entre 1980 y 1988, el PBI per cápita registró una caída del 17,6%. Si se computa la caída estimada para 1989, el valor del PBI por habitante habrá de ser inferior en un 22% al de 1980 y de un nivel equivalente al de comienzos de los años sesenta. En el caso del PBI industrial per capita, la contracción fue, entre 1980 y 1988, del 24,4%.

En la década del 70 (1970-79), el valor promedio anual del coeficiente inversión fija/PBI fue del 21,5%. Este nivel se desplomó hasta el 11,6% en 1985 y al 10,7% en 1989. Ambos valores son los más bajos de la serie histórica del siglo.

Esta caída de la inversión bruta determinó la existencia de una desinversión neta. En otros términos, a lo largo de la década del 80, el stock del capital reproductivo (maquinaria y equipo) experimentó un achicamiento continuo. Su valor, en 1988 era un 34,2% inferior al existente en 1980. Ello quiere decir que la deuda externa no se pagó únicamente con parte de la producción anual sino, también, con parte del stock de capital existente.

Ajuste sí, modernización no

La aplicación continua del ajuste redujo, pues, el flujo anual de producción, anuló la inversión, hipotecó la capacidad futura del crecimiento y sumió a millones de argentinos en la pobreza.

En estas condiciones de drenaje continuo del excedente y de destrucción del capital físico, las promesas de modernización lanzadas por Alfonsín y por los estrategas del plan Austral, pertenecían al reino de la utopía.

Las elecciones parlamentarias del 6 de septiembre de 1987 dieron cuenta de la impopularidad del programa del FMI y Sourrouille. El radicalismo perdió en casi todas las provincias y el partido justicialista sumó votos bajo la conducción de Antonio Cafiero.

Esta derrota electoral fue una amarga lección para Raúl Alfonsín. Su ilusión de que la burguesía repatriara sus capitales prófugos y replanteara su comportamiento parasitario se esfumó de golpe.

La política de Sourrouille había conseguido reducir el salario real (el plan Austral operó una transferencia adicional de la clase obrera a la burguesía por 5.000 millones de dólares anuales, esto es, aproximadamente 7% del PBI), pero este aumento de la masa de plusvalía no se tradujo en un aumento correlativo de la inversión.

Por otra parte, el gobierno radical continuaba suministrando subsidios sin cortapisa, a la burguesía argentina. En un contexto de colapso de las finanzas públicas (precipitado por la crisis de los pagos externos), el proceso de “acumulación primitiva” de la burguesía continuaba sin interrupciones¹³.

En un informe enviado al Congreso¹⁴, el gobierno dio cuenta que en 1987, la suma de subsidios al sector privado llegó a 3.995 millones de dólares. Esto es, 5% del PBI.

Para tener una idea de la magnitud de esta transferencia, basta señalar que representó el 70% del déficit del sector público de ese año, el 70% de la inversión pública, el 37% de los sueldos de la Administración nacional y casi el 23% de la recaudación tributaria.

Del total de subsidios, 1.986 millones de dólares, esto es, el 50%, correspondieron al régimen de promoción industrial. Azpiazu y Basualdo han demostrado, en una investigación que abarca los años 1980-85, que este régimen posibilitó a la burguesía industrial invertir cada vez menos con fondos propios.¹⁵

En 1985, toda la inversión neta del sector industrial fue financiada con

subsidio estatal. En otras palabras, en el sector industrial argentino, toda la acumulación es “acumulación primitiva” con subsidios estatales. Cada austral que invierte la burguesía, es un austral suministrado por el erario público.

El reverso de esta situación de parasitismo de los capitalistas nacionales, de recesión y de desinversión neta global, estaba dado por la obstinación de Alfonsín y de Sourrouille en pagar la deuda.

El ajuste bloqueaba indefinidamente la perspectiva de ingresar a una fase productiva, pero la política de Sourrouille frente a la banca era incapaz de percibir hasta los cambios más significativos.

En épocas del Austral, el valor de la deuda argentina en Nueva York, era de 70 centavos por dólar. En octubre de 1986, ese valor había caído a 60 y en julio de 1987, después de la moratoria de Brasil (febrero de 1987), a 47 centavos. En mayo de 1989, se desplomó a un mínimo de 12 centavos. Pero ningún hecho, ni siquiera la propuesta secreta de Brasil de iniciar una moratoria conjunta, sacudió la contumacia de Sourrouille, de transitar por la ruta del ajuste.

Para el bloque dominante, incluso para sus sectores más concentrados, esta estrategia empezaba a mostrar su debilidad, en tanto su aplicación indefinida comprometía el proceso de reproducción y abría la posibilidad de que la legitimidad del régimen inaugurado en 1983 empezara a ser cuestionada.

Esta sensación se hizo más fuerte cuando, a comienzos de 1988, el gobierno de Alfonsín intentó privatizar algunas empresas —como parte de la “reforma estructural” del Banco Mundial— sin dar participación a los capitalistas nacionales. A partir de allí, los “capitanes de la industria” se distanciaron del gobierno y empezaron a hostilizarlo.

Poder económico y protagonismo político

En julio de 1988, la Argentina se encontró de nuevo al borde de la hiperinflación. El gobierno de Alfonsín, acorralado por la crisis, buscó negociar con la burguesía una salida para evitar una explosión inflacionaria, cuando saltaban unos pocos meses para las elecciones presidenciales.

A diferencia de lo que había ocurrido tres años atrás, en 1985, cuando el bloque dominante observaba a distancia de qué manera Sourrouille y sus hombres elaboraban el salvataje, en esta oportunidad, la burguesía hizo una abierta irrupción en la cúspide del poder. Estableció un comando unifi-

cado, el Grupo de los 8, para negociar con Alfonsín. De las tratativas, surgió el Plan Primavera (agosto de 1988), un programa que reeditaba el mecanismo de subir la tasa de interés y atrasar el dólar, pero al cual se le agregaba un componente adicional. El Banco Central proporcionaba un cofre de divisas para ser rematadas en el mercado libre.

En otras palabras, Sourouille se lanzaba a frenar la inflación hasta el 14 de mayo de 1989, a costa de entronizar una especulación fenomenal.

La gestión directa de la burguesía, su capacidad para imponer y supervisar medidas, era la contracara de su impresionante avance en la arena económica.

Durante el ciclo alfonsinista, el boque dominante contabilizó varias victorias: instituyó un nuevo piso para el salario real, consiguió incrementar el ejército industrial de reserva y aumentó su propio grado de concentración económica.

Para ponerlo en todos sus términos: el proceso de centralización y concentración del capital continuó siendo el rasgo dominante de la Argentina, aún en medio de una crisis descomunal¹⁶.

Al tiempo que la producción retrocedía y que se intensificaba la exacción del imperialismo, la gran burguesía se fortalecía. Al igual que en 1976-83, ese crecimiento registró un ritmo mayor que el de las empresas extranjeras radicadas en el país.

La cúpula burguesa continuó diversificando sus actividades. En virtud de ello, “patria contratista”, “patria financiera”, “patria exportadora”, “patria terrateniente”, “capitanes de la industria”, pasaron a ser distintas denominaciones de un sólo bloque hegemónico.

Tal proceso de concentración y diversificación, que se verifica desde 1976, determinó la expulsión de fracciones de la burguesía subordinada, tendió a homogeneizar, en algunos casos, las diferencias entre las fracciones monopólicas y modificó los términos de la antinomia tradicional “sector agrario”, “sector industrial”. En la actualidad, ya no es cierto que solamente la burguesía agraria produce para el mercado mundial y que la burguesía industrial lo hace para el mercado interno.

El bloque exportador, que pugna por una mayor inserción en el sistema mundial, está formado por la burguesía terrateniente y por las fracciones de la burguesía industrial reconvertida que realizan una parte de su producción en el mercado externo y que, por ello, no dependen del salario para su expansión.¹⁷

El “proyecto de modernización” y las elecciones de 1989

A partir de 1988, el proyecto del bloque dominante de reestructurar el Estado y de orientar la producción al mercado internacional gozaba de un predominio indiscutido. Tal predominio estaba edificado sobre las cenizas del Plan Austral.

Todas las fracciones de la burguesía coincidían en la necesidad de abrir una fase expansiva que dejara atrás la inflación, la especulación y las regulaciones. Aún cuando tales aspiraciones no estaban traducidas en un plan acabado, el nuevo curso requería la adopción de medidas de fondo, entre ellas, el remate de las empresas estatales y la “capitalización” de la deuda externa a gran escala.

La crisis convirtió a las propuestas económicas en un punto de referencia de las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989.

Tanto Eduardo Angeloz como Alvaro Alsogaray, no bien fueron ungidos candidatos, se pronunciaron por el proyecto del bloque dominante. En un comienzo, Menem intentó diferenciarse de la propuesta radical. Eran las épocas en que el caudillo riojano inspiraba desconfianza con las amenazas de “salarizazo” y de “moratoria”

Pero, con el correr de los meses, el candidato peronista fue conformando una versión “aggiornada” de sus propuestas iniciales. La palabra “moratoria” fue complementada con el vocablo alfonsinista “concertación”. En cuanto al “salarizazo”, Menem explicó cuidadosamente que esa expresión denotaba que los salarios crecerían si aumentaba la productividad.

A fines de 1988, las propuestas del peronismo se acercaban, cada vez más, a las de Angeloz. Domingo Cavallo se convirtió en un ministeriable de primera línea. La privatización de empresas, la unificación cambiaria, la “flexibilización” laboral, el respeto a la deuda interna y externa, quedaron perfectamente explicitados en la propuesta de Menem. En síntesis, el modelo de acumulación de la burguesía estaba incorporado en el programa del peronismo, del radicalismo y de la UCD, aun cuando se pudieran apreciar diferencias más o menos importantes.

A lo largo de la campaña electoral se escucharon dos variantes de un mismo proyecto estratégico.

Por un lado, Angeloz y Alsogaray encarnaban la variante “neoliberal” del esquema exportador, que enfatizaba la apertura indiscriminada, el propósito de privatizar todo, la reducción al máximo de la intervención estatal y la necesidad de seguir bajando el salario.

Del otro lado, el peronismo representaba la variante “pragmática” o “desarrollista”. Menem se mostraba partidario de mantener cierto margen de regulación estatal, de expandir limitadamente el mercado interno y de servirse de los subsidios para impulsar la producción. Además, dada la extracción obrera de su electorado, insinuaba una propensión a buscar salidas negociadas con la burocracia sindical.

Se trataba de diferencias no menores, pero que no llegaban a alterar la esencia del rumbo estratégico elegido.

La defensa de un programa alternativo estuvo a cargo de Izquierda Unida, conformada a fines de 1988 por el Partido Comunista, el MAS y otros grupos. Detrás de la fórmula Néstor Vicente-Luis Zamora, el acuerdo de izquierda impulsó un programa de contenido anticapitalista, que propiciaba la expropiación del bloque hegemónico¹⁸.

Plan Primavera e hiperinflación

El 6 de febrero de 1989, cien días antes de las elecciones, el Plan Primavera estalló en las manos de sus autores. El gobierno decretó un feriado bancario y el dólar, en pocas semanas, empezó a multiplicar su cotización indefinidamente. De esta forma, se abrió un proceso de crisis fulminante, que desembocó en la hiperinflación.

El esquema básico del Plan Primavera había sido retrasar la devaluación del dólar, para lograr una estabilización ficticia hasta el 14 de mayo. Se trataba, según lo reconoció más tarde el elocuente Adolfo Canitrot, de una juguartera electoral. Había que llegar al mes de abril con una inflación del 2% o del 4%, a costa de dilapidar las reservas del Banco Central. Los costos del ajuste debían quedar agendados para después de las elecciones.

Pero, la gravedad de la crisis económica, la impaciencia de la banca acreedora frente al despilfarro de divisas y, finalmente, el carácter intrínsecamente explosivo del plan, condujeron al crac cambiario del 6 de febrero. La pérdida de reservas ascendió, entre agosto de 1988 y enero de 1989, a 1.753 millones de dólares.

La crisis selló, desde el primer momento, la suerte electoral de Eduardo Angeloz. Pero, además, determinó que la burguesía, el Grupo de los 8, tomaría el control directo de la gestión económica. Las distintas fracciones del empresariado iban y venían de la Quinta de Olivos para imponer sus políticas. Su objetivo más importante era obtener la liberación cambiaria para aprovechar la estampida del dólar en toda su magnitud.

Cuando la crisis se hizo insostenible, el equipo Sourrouille emprendió la huída y fue reemplazado por Juan Carlos Pugliese. El hasta entonces presidente de la Cámara de Diputados, con su incapacidad profesional y su conservatismo cerril, ejecutó íntegramente el programa de la burguesía concentrada. Con el asesoramiento de Roberto Alemann y Adalbert Kriger Vaseña, liberó el mercado de cambios. En pocos días, el dólar trepó de 50 a 500 australes. La crisis entró, así, en una fase inédita.

A pesar de que el Banco Central emitía continuamente billetes de elevada nominación, el dinero empezó a desaparecer de la economía. Todas las operaciones comerciales, aún las más pequeñas, se hacían en dólares y el dólar se convirtió en la fuente exclusiva de valor. El déficit fiscal alcanzó cifras descomunales (20% del PBI), por la licuación de los ingresos y por los vencimientos continuos de la deuda gubernamental dolarizada por Sourrouille. La inversión se desplomó y la recesión se extendió a todos los circuitos productivos. El ciclo de producción y realización de plusvalía se desmoronó y la desocupación creció fuertemente. En mayo, la inflación llegó al 80% y el salario mínimo anotó un nivel de 20 dólares. El ingreso de los asalariados registró el valor más bajo del capitalismo contemporáneo y se ubicó por debajo del mínimo de América Latina.

El 14 de mayo consagró el triunfo de Carlos Menem con el voto de composición mayoritariamente obrera. Esa fecha abre un período clave de 30 días en la historia argentina.

La agudización de la crisis y del receso productivo arrojó a millones de argentinos al hambre y a la desesperación. A fines de mayo, en Rosario y en algunos puntos del Gran Buenos Aires (Quilmes, Moreno, General Sarmiento), decenas de miles de trabajadores y desocupados se lanzaron sobre los supermercados para apoderarse de alimentos.

La reacción del sistema fue instantáneo. La respuesta a la crisis social fue la represión. El radicalismo y el peronismo, erigidos juntos en el “partido del orden”, votaron el estado de sitio. Según el Ministerio del Interior, la represión cobró 14 muertos, 80 heridos y centenares de detenidos. La ingobernabilidad de la situación empujó a Alfonsín a abandonar la presidencia.

En tanto, Menem daba a conocer su programa económico con un gesto lacónico. Le bastó designar a Miguel Roig, de Bunge y Born, en el Ministerio de Economía, para afirmar su intención de continuar, por todos los medios, el proyecto excluyente de la gran burguesía inaugurado por Martínez de Hoz en 1976.

Esta nueva ofensiva del capital, por un lado, abre un espacio de confron-

tación global con los intereses de la clase trabajadora. Por el otro, la subordinación del programa de la burguesía a las determinaciones del imperialismo, esto es, al pago de la deuda, determina que la lucha contra la opresión externa se vincule cada vez más a la lucha contra el bloque dominante interno.

Este eje de las contradicciones nacionales servirá de guía para la resistencia obrera y popular a la aplicación del proyecto de Menem y Bunge y Bom.

Buenos Aires, octubre 1989.

NOTAS

- ¹ Para Horowicz, la muerte de Perón y la asunción de Isabel marca el comienzo de la cuarta etapa del peronismo. Las anteriores comprenden, el primer gobierno peronista que concluye con el golpe del 55, la resistencia que se extiende de 1955 hasta el retorno de Perón y, la tercera, que se inicia con la asunción del gobierno de Héctor Cámpora. Ver Alejandro Horowicz, *Los cuatro peronismos*, Ed. Legasa, Buenos Aires, 1985.
- ² Guillermo E. Gigliani, El "frac" de Wall Street y la hegemonía norteamericana, *Realidad Económica* Nº 79, 6º bimestre de 1987, pags. 32-53.
- ³ Eduardo M. Basualdo, *Deuda externa y poder económico en la Argentina*, Nueva América, Buenos Aires, 1987, pag 75.
- ⁴ James Petras, ¿Quién manda en América Latina?, *Realidad Económica* Nº 81, 2º bimestre de 1988, pags. 34-66
- ⁵ Eduardo Halliburton, José Mauro Bianco y Carlos A. Villalva, *Deuda externa privada. El destino de una investigación*, *Realidad Económica* Nº 87, 2º bimestre de 1989, pags. 72-113. La investigación fue llevada a cabo en 1984. Sobre un total de 43.006 millones de dólares, la cantidad examinada alcanzó nada más que a 5.080 millones. Los inspectores encontraron irregularidades y solicitaron que fueran dadas de baja operaciones por aproximadamente 1.500 millones de dólares, esto es, el 29.5% de lo investigado.
- ⁶ Michel Aglietta, *Regulación y crisis del capitalismo*, Siglo XXI, México 1979, pags. 67-70. Señala Aglietta: "Llegamos, pues, a la siguiente proposición: el mejor indicador estadístico para representar la evolución real de la tasa de plusvalía es la evolución del costo salarial social real. Este indicador varía inversamente con la tasa de plusvalor a largo plazo", pag. 67.
- ⁷ Los memorandum de entendimiento se firmaron en junio y julio de 1985, en enero y julio de 1986, en enero, julio y octubre de 1987 y, finalmente, en febrero de 1988.
- ⁸ Para un análisis de los programas de ajuste ver, Hilda Sánchez y José Luis Solís, *¿Ajuste o reactivación?: los dilemas de la política económica en la actual crisis*, *Economía de América Latina* Nº 14, CIDE, México, 1986, pags. 13-26.

- ⁹ James Petras, *op. cit.*, pag. 42
- ¹⁰ Pierre Salama, *Deudas y dolarización, Economía de América Latina* Nº 14, CIDE, México, 1986, pags. 179-191
- ¹¹ Vladimir I. Lenin, *El imperialismo, etapa superior del capitalismo*, Polémica, Buenos Aires, 1974, pag. 124.
- ¹² Guillermo E. Gigliani, *La crisis externa argentina: ¿préstamos financieros o inversión directa?*. *Realidad Económica* Nº 82, 3er. bimestre de 1988, pags. 60-74.
- ¹³ A partir de la intervención estatal en la década del 30, la acumulación capitalista en la Argentina se ha apoyado, en diverso grado, sobre la "acumulación primitiva", esto es, en formas de apropiación del excedente o de realización de ganancias fuera del proceso regular del mercado, garantizadas por la gestión del Estado. El mecanismo clásico ha sido el subsidio directo a la empresa privada. La "acumulación primitiva" representa el estadio inicial en el desarrollo capitalista. Ver Carlos Marx, *El Capital*, Tomo I, capítulo 24, Fondo de Cultura Económica, México, 1973, especialmente pags. 606-609 y 637-646.
- ¹⁴ Cámara de Diputados de la Nación, *Trámite Parlamentario* Nº 108, Mensaje y proyecto de ley de presupuesto general 1989, 29 de setiembre de 1988, pags. 3033-36
- ¹⁵ Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, *Cara y contracara de los grupos económicos. Estado y promoción industrial en la Argentina*, Cántaro, Buenos Aires, 1989.
- ¹⁶ Manuel Acevedo, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, *Estructura empresarial de la cúpula industrial (1973-87)*, mimeo, Buenos Aires, 1989.
- ¹⁷ Carlos Abalo, *¿Hacia un nuevo conservadorismo popular?*, *Sur*, 9 de julio de 1989.
- ¹⁸ Las propuestas de Izquierda Unida fueron elaboradas por una comisión integrada por economistas del Partido Comunista, el Mas e independientes. La discusión pública del programa se llevó a cabo en el I Seminario de Economistas de Izquierda Unida reunido los días 30 y 31 de marzo de 1989. Ver, *Qué Pasa* Nº 421, 27 de abril de 1989 y *Solidaridad Socialista* Nº 279, 24 de abril de 1989.